

Venezuela: Juristas Condenan Acoso contra Abogado de Derechos Humanos  
[http://www.icj.org//article\\_top.php3?id\\_article=3670&lang=en](http://www.icj.org//article_top.php3?id_article=3670&lang=en)

13 de abril de 2005

Dr. Isaías Rodríguez Díaz  
Fiscal General  
Edificio Sede del Ministerio Público  
Avenida Universidad, Edificio Ministerio Público  
Caracas, Venezuela

Fax: +58 212 577 2154; +58 212 577 1144

Ref: Acoso contra el abogado Carlos Ayala Corao

Sr. Fiscal General:

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está compuesta por juristas procedentes de todas las regiones y sistemas legales del mundo dedicados a promover el imperio del derecho y la protección jurídica de los derechos humanos.

En esta oportunidad queremos manifestarle nuestra profunda preocupación frente al acoso del que está siendo víctima el Sr. Carlos Ayala Corao, abogado y Presidente de la Comisión Andina de Juristas.

De acuerdo con la información que hemos recibido, el Sr. Ayala habría sido citado a declarar en el marco de una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Sexta con Competencia Nacional del Ministerio Público con el objeto de "imputarlo por los hechos que investiga" dicha representación fiscal. En el documento de citación no se especificaron los hechos por los que se lo investigaba, pero tras prestar declaración se informó, por medio de la prensa, que se trataba de la supuesta participación del Sr. Ayala en la redacción del decreto con el que Pedro Carmona pretendió ilegítimamente disolver los poderes públicos el 12 de abril de 2002 mediante un golpe de estado, hecho éste que es rotundamente negado por el abogado. De hecho, durante los sucesos de abril de 2002 la principal actividad del Sr. Ayala consistió en proteger los derechos del congresista Tarek William Saab, quien había sido detenido por los servicios de seguridad. Tras su citación, y después de 3 horas de espera, el Sr. Ayala no fue finalmente imputado puesto que la fiscal tenía que "atender actividades preferentes" y se fijó para el 14 de abril la próxima audiencia del caso. A pesar de que tanto el Sr. Ayala como su abogado solicitaron se le informara acerca de la causa de la imputación, ésta no fue informada y les fue denegado todo acceso al expediente.

La CIJ está profundamente preocupada frente a la citación del Sr. Ayala ya que deja en evidencia que es simplemente un intento de amedrentarlo en su trabajo en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. En efecto, estos hechos deben observarse a la luz del hostigamiento que varios abogados y defensores de derechos humanos venezolanos han venido sufriendo en los últimos años. El Sr. Ayala es peticionario en diversos casos frente al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, hecho por el cual ha sido víctima de diversas amenazas. Recientemente, el Sr. Ayala asistió a la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al término de dicha sesión, la Comisión reiteró su "preocupación por la situación de riesgo y estigmatización de la cual son objeto los defensores de derechos humanos en Venezuela y por el clima de hostilidad que enfrentan [...] aquellos defensores de derechos humanos que asistieron a

las audiencias de la Comisión" (Comunicado de Prensa N° 8/05 del 11 de marzo de 2005).

Los hechos que rodean a la imputación formulada contra el abogado Ayala manifiestan que el verdadero propósito de ésta es intimidarlo por su actividad profesional, tanto en Venezuela como en foros internacionales, en defensa de los derechos humanos. La ausencia de especificación del delito del que se lo acusaba y la posibilidad de que se le prohíba salir del país para que continúe con sus actividades profesionales frente a organismos internacionales dejan a la vista que lo que se busca con esta acusación es amedrentar al Sr. Ayala por las denuncias que ha formulado y el acompañamiento que ha brindado a varias organizaciones de derechos humanos en la Comisión Interamericana.

Estos actos contra el Sr. Ayala son contrarios a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1990. Dichos principios establecen que los abogados deben poder llevar a cabo su tarea sin intimidaciones de ningún tipo y que el Estado debe garantizarles protección frente a persecuciones que tengan como motivo, ya sea explícito o ulterior, persecuciones o sanciones. En particular, los Principios establecen:

Principio 16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.

Asimismo, queremos llamar su atención a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptados por resolución 53/144 de la Asamblea General de la ONU, en la que se reconoce el papel fundamental que juegan los defensores de derechos humanos al denunciar violaciones a los derechos humanos y el derecho a prestar asistencia profesional destinada a la defensa de dichos derechos. En particular, la Declaración dispone:

9. 3. [...] toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a:

- a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida; [...]
- c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Asimismo, la Declaración reconoce el derecho a recurrir a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos sin impedimentos:

9.4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad con los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos internacionales que tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con ellos.

La actuación de la Fiscalía y los cargos que posiblemente enfrenta el Sr. Ayala constituyen una persecución activa contra él por su actividad en la defensa de los derechos humanos.

En consecuencia, la CIJ insta al Gobierno de Venezuela a tomar todas las medidas pertinentes para que cese inmediatamente las persecuciones e intimidaciones de que es víctima el abogado Carlos Ayala Corao. Asimismo, la CIJ llama al Gobierno a desistir de toda persecución contra el Sr. Ayala y a garantizar su protección frente a todo tipo represalias e intimidaciones en su contra. Por último, la CIJ insta al Gobierno a respetar sus obligaciones internacionales sobre el rol de la profesión legal y de los defensores de derechos humanos, principalmente en lo que se refiere a las garantías necesarias para llevar a cabo su tarea.

Nicholas Howen  
Secretario General

Cc: SE Sr. Bernabé Carrero Cuberos  
Embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra  
Chemin François-Lehmann 18<sup>a</sup>  
1218, Grand-Sacconex

Fax: 022 723 2881

Hugo Rafael Chávez Frías  
Presidente de la República  
Palacio de Miraflores  
Av. Urdaneta. Esq. de Bolero  
Caracas, Venezuela

Fax: +58 212 801 3644

Dra. Luisa Ortega Díaz  
Fiscal Sexto a Nivel Nacional  
Avenida Urdaneta, Esquinas de Animas a Platanal, Piso 11  
Caracas, Venezuela

Fax: +58 212 577 2154; +58 212 577 1144

Unidad de Defensores de Derechos Humanos  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
1889 F St. NW  
Washington D.C. 20006  
Estados Unidos

Fax: +1 202 458-3992

The following documents are available:

This article comes from International Commission of Jurists <http://www.icj.org>  
The URL for this story is:

The International Commission of Jurists P.O. Box 216, 81a Avenue de Chatelaine, 1219  
Geneva, Switzerland.

Tel : +41(0)22 979-38-00 Fax : +41(0)22 979-38-01 E-mail : [info@icj.org](mailto:info@icj.org)

© Copyright 2001, The International Commission of Jurists. All rights reserved. Please  
address all site-related comments and problems to [info@icj.org](mailto:info@icj.org).

## Venezuela — Destacado abogado de derechos humanos se enfrenta a la persecución penal

[http://www.hrw.org/spanish/press/2005/venezuela\\_ayala.html](http://www.hrw.org/spanish/press/2005/venezuela_ayala.html)

(Washington, D.C., 5 de abril de 2005) — Las autoridades venezolanas deben suspender inmediatamente una investigación criminal dirigida contra uno de los abogados de derechos humanos más renombrados de América Latina, señaló hoy Human Rights Watch. El destacado jurista Carlos Ayala Corao fue citado a comparecer esta mañana ante un Fiscal de Caracas para informarle de la apertura de una investigación criminal contra él, aparentemente por su presunta participación en el golpe fallido de abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez. Ayala, que preside actualmente la Comisión Andina de Juristas, una organización regional no-gubernamental, ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ayala compareció ante el Fiscal, quien le informó que su caso había sido postergado y le ordenó presentarse de nuevo la próxima semana. El Fiscal no entregó ninguna explicación por la demora ni información sobre la investigación.

"Es un caso claro de persecución política dirigida contra alguien que ha sido un crítico eficaz del desempeño del gobierno de Chávez en materia de derechos humanos", señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "La acusación de participación en el golpe es indignante y debería ser rechazada de plano ante cualquier tribunal independiente", agregó.

Human Rights Watch insta al Fiscal General de Venezuela, Isaías Rodríguez, que suspenda inmediatamente la persecución penal del distinguido jurista de derechos humanos.

Carlos Ayala ha sido un litigante frecuente en casos de violaciones a los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces en apoyo a representantes de grupos de derechos humanos no-gubernamentales venezolanos. El 3 de marzo de este año participó en una sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicada a examinar los derechos humanos en Venezuela. Al término de la reunión, la comisión emitió una declaración expresando su preocupación por la "situación de riesgo y estigmatización" que afecta a los defensores de los derechos humanos en Venezuela

Durante el golpe frustrado, Ayala intervino para proteger los derechos de un congresista prochavista que había sido detenido ilegalmente y estaba incomunicado por los servicios de seguridad. El congresista, Tarek William Saab, agradeció posteriormente a Ayala su oportuna intervención en un programa de televisión. Una comisión especial de la Asamblea Nacional que investigó los acontecimientos de abril de 2002 también señaló que Ayala había esperado durante cinco horas en la sede central de la policía mientras intentaba obtener la liberación de Tarek William Saab.

Durante el último año, la mayoría prochavista en la Asamblea Nacional de Venezuela ha debilitado seriamente la independencia judicial. En diciembre de 2004, nombraron a 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, después de aprobar una ley en mayo que ampliaba el número de ministros de 20 a 32. La coalición chavista justifica la ampliación del máximo tribunal como una respuesta a los fallos favorables a la oposición, como la altamente cuestionable decisión de absolver a cuatro oficiales militares acusados de participar en la intentona golpista de 2002.

El mes pasado, tras los nuevos nombramientos judiciales, la Sala Constitucional del mismo tribunal anuló las absoluciones-una decisión aparentemente sin precedentes en la historia reciente de Venezuela.

---

**Es un caso claro de persecución política dirigida contra alguien que ha sido un crítico eficaz del desempeño del gobierno de Chávez en materia de derechos humanos.**

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch

---

Numerosos artículos de prensa recientes señalan que el Fiscal General está estudiando iniciar procesos penales contra más de 200 personas por delitos políticamente motivados como la participación en la intentona golpista. Los abogados defensores esperan que el número se eleve significativamente en los próximos meses.

"Este caso demuestra que las autoridades venezolanas están decididas a valerse de la persecución penal como instrumento de hostigamiento a quienes critican el gobierno", señaló Vivanco.